



Siembra de maíz en una de las parcelas en las que ha trabajado el grupo. EL NORTE

El maíz busca valor añadido con la reducción de emisiones de CO2 gracias a la agricultura de precisión

El Grupo Operativo Maíz Sostenible consigue cuantificar las cantidades de dióxido de carbono y valida un protocolo de ensayos

SILVIA G. ROJO



VALLADOLID. «Los productores están cada vez más preparados para asumir los desafíos de la agricultura de precisión y aprovechar sus oportunidades, pero hay que seguir impulsando la formación y la capacitación técnica». Esas palabras llevan la firma de Manuel Pérez-Ruiz, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Uni-

versidad de Sevilla y coordinador técnico del Grupo Operativo Maíz Sostenible que tras dos años de trabajo, ha presentado esta semana sus conclusiones en Salamanca.

En primer lugar, el grupo ha sido capaz de cuantificar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del cultivo, «algo muy importante de cara a los próximos años porque pueden existir certificaciones de reducción de gases de efecto invernadero», apunta el profesor.

Hasta ahora, la literatura que existía a nivel europeo hablaba, por defecto, de 400 kilos de CO2 por tonelada de materia seca. Lo que han visto es que en realidad, cuando el cultivo se hace a través de agricultura convencional la cifra se sitúa en 200 kilos y en el caso de la aplicación de tecnología de precisión o 4.0, se reba-

ja hasta 180 kilos. «La rentabilidad de ese maíz que viene por los kilos, podría sumar el hecho de que se ha producido con menos emisiones, hay determinadas industrias de bioetanol que están dispuestas a comprar ese maíz más caro y el agricultor podrá cobrar más».

Además este equipo, en el que también participan empresas privadas, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) o diez agricultores de todo el país entre ellos tres de la región, ha validado un protocolo de prácticas en agricultura de precisión donde propone medidas innovadoras para mejorar la competitividad, la resiliencia o mitigar el cambio climático incorporando abonado variable o semillas diferenciadas, en definitiva, adecuando los insumos a las necesidades de cada parcela. El estu-

El estudio ha cuantificado en 180 kilos de CO2 por tonelada de materia seca aplicando tecnología de precisión

León es la provincia de España donde se cultiva más maíz y muchos de sus agricultores están a la última en tecnología

dio deja claro que es posible realizar el cultivo de una forma más eficiente desde el punto de vista de sostenibilidad sin reducir el rendimiento.

León es la provincia española en la que más superficie de maíz se siembra cada año, 73.811 hectáreas la última campaña.

La práctica

En Cabrereros del Río (León), Héctor Llorente lleva utilizando tres años las últimas tecnologías tanto en el maíz como en el trigo, gracias a la cooperativa UCOGAL, y asegura que el rendimiento en su explotación se ha visto incrementado entre un 7 y un 8%.

Este agricultor realiza mapas de rendimiento que a la hora de sembrar o de abonar, le dan las indicaciones necesarias para realizarlo de manera variable. Además, en su explotación está anotado hasta el más mínimo detalle: «Tengo registrado el día que siembro, el nitrógeno que apporto, los tratamientos, los litros de agua en cada sector de riego, los litros y las horas, los consumos de gasoil cuando siembro, cuando abono, está todo controlado».

Llorente, que ha aportado sus datos al proyecto, explica que «la idea es que en el futuro se pague más por este maíz, si yo estoy bajando la emisión hay que recompensarlo».

Se muestra convencido de que estas buenas prácticas son más habituales de lo que pueda parecer, «estamos llevando las nuevas tecnologías al campo y las utilizamos al 100%». Concluye con su ejemplo: «Obtengo más producción en variable que en convencional porque distribuyo según la textura del suelo para sacar más rendimiento».

El cereal sigue sin tocar suelo con bajadas generalizadas en las lonjas de la región

S. G.

VALLADOLID. El precio de los cereales sigue sin tocar suelo y tanto la lonja de Salamanca, el lunes pasado, como la de Zamora o la de León en días posteriores, han optado por aplicar bajas que han

alcanzado hasta los diez euros en la cebada en el caso de la lonja leonesa. El trigo, el triticale o la avena también han caído otros ocho euros en esta lonja que tiene lugar cada miércoles en Santa María del Páramo.

Según justifican desde esta en-

tidades, la caída se produce «debido a las noticias de los mercados internacionales, en las que ya se descuenta que se renovará el acuerdo que facilita la exportación de grano de Ucrania con la mediación de China».

Además, «la bajada del petróleo y la paridad euro-dólar, presionan los precios. Solo la sequía que continúa en Argentina, frenan en parte esta caída», indican estas fuentes.

En el mercado nacional, «los compradores no tienen prisa en cerrar operaciones a la espera de

nuevas oportunidades, puesto que además el consumo ganadero se ha ralentizado». Al parecer, sigue existiendo mucha mercancía en los puertos a la que no se da salida, de momento.

La perspectiva internacional es igualmente a la baja y los agricultores, con la mayor parte de los gastos ya realizados en la siembra y posteriores labores, se preguntan cuánto tendrán que recoger si no se recuperan los mercados para cubrir los gastos de la sementera más cara de la historia.

LA TRILLA
JUAN QUINTANA

Europa potencia las legumbres



En España producimos de media el 40% de las legumbres que consumimos; solo el 30% en el caso de alubia, y el 50% y el 60% respectivamente en garbanzo y lentejas. Esto quiere decir que nuestro potencial de crecimiento es todavía muy alto, y para ello una fuerte palanca de desarrollo debe ser la nueva Política Agraria Común (PAC). Bruselas ha apostado firmemente por este cultivo, debido a sus significativas ventajas medioambientales, como son el bajo consumo de agua, su capacidad de fijar dióxido de carbono y, como factor diferencial, su capacidad de enriquecer el suelo mediante la aportación natural de nitrógeno, lo que reduce las necesidades de fertilización de los cultivos posteriores.

Por ello los legumbristas respiran con cierto optimismo, a pesar de los reducidos márgenes provenientes de la actual situación económica y del encarecimiento de los costes de producción. Pero no solo es necesario que aumente la demanda y se eleven los precios, también que se potencie un mayor reconocimiento de los productos locales frente a los importados. Para ello la diferenciación en línea y la promoción de origen deben jugar un papel muy relevante en este nuevo periodo.

De acuerdo con el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), mientras en 2016 el consumo anual en España era solo de 3,1 kilos por persona y año, en octubre de 2022 ya había superado los 3,4 kilos. Esto ha supuesto un crecimiento medio anual del 3,3% en valor, aunque una caída en volumen de 2,2%.

Las dos últimas campañas tampoco han ayudado, con producciones muy cortas en España debido a la escasez de agua; y también a nivel mundial. Esta situación no ha llegado a generar falta de abastecimiento, pero sí escasez de producto y, por tanto, subida de precios, reforzada por la actual corriente inflacionista.

El sector apícola pide medidas ante la «crisis estructural» que sufre

Alrededor de 600 profesionales trasladan sus reivindicaciones a ante el Ministerio de Agricultura

S. G.

VALLADOLID. El sector de la apicultura ha trasladado sus reivindicaciones a la capital de España y alrededor de 600 personas convocadas por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, se movilizaron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir «soluciones» ante la «crisis estructural» que ha llevado al sector a una «situación límite». Varios fueron los autobuses que se fletaron desde la región para participar en esta concentración.

Desde la Alianza UPA-COAG justificaron esta acción a las puertas del Ministerio debido a las de-

mandas de un sector que está sufriendo una «sangría» económica que suma varios motivos.

Según la organización, los motivos que tienen ahogado al sector apícola son «la sequía y las altas temperaturas han reducido la producción de miel a menos de la mitad de una campaña normal; los apicultores han tenido que comprar mucho más alimento que otros años a precios disparados; una alta mortandad de colmenas por la varroa o el abejarruco; precios ruinosos y un mercado bloqueado por las importaciones de una miel de «dudosa calidad» procedente de China o Uruguay y que por una mala normativa se vende como producción española confundiendo así al consumidor».

En este sentido, las organizaciones convocantes calificaron de «absolutamente irresponsable» el comportamiento de los envasadores y la distribución es-



Los apicultores salmantinos portaron una pancarta relativa al veterinario de explotación. EL NORTE

pañola, que «discriminan la miel española y la sustituyen por mieles importadas a precios muy por debajo de los costes de producción en nuestro país».

Así, aseguran que «en la mayoría de los lineales de la gran distribución se encuentran mayoritariamente mieles mezcladas donde el porcentaje de miel española es absolutamente testimonial, y la miel española tiene escasa o nula presencia».

Ante esta situación, «el Ministerio debe actuar y defender a

nuestras apicultoras y apicultores».

La Alianza UPA-COAG insiste en que las administraciones, tanto Ministerio como Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural «o afrontan los problemas del sector productor, o será irremediable el abandono de una actividad que favorece el medio ambiente y la biodiversidad». Concluyen que «no entendemos que se quiera declarar Patrimonio Mundial a la apicultura por todos los beneficios que apor-

ta pero, sin embargo, se dejan abandonados a los apicultores a su suerte».

Otro tema que preocupa a este sector y que así se reflejó en algunas pancartas desplegadas en la manifestación, es la futura entrada en vigor del veterinario de explotación. Si no se da marcha atrás, todas las explotaciones ganaderas, incluidas las apícolas, deberán contratar los servicios de un veterinario de manera fija, algo complicado en las explotaciones trashumantes.

La pesca culpa al Gobierno de la caída en ventas

El sector atribuye el desplome del 20% a la exclusión del pescado de la rebaja del IVA

CRISTINA ALONSO MADRID

El sector pesquero eleva el tono contra el Gobierno. Pasados dos meses de la entrada en vigor de la rebaja del IVA a determinados alimentos, han constatado un desplome en las ventas del 20% que relacionan con la exclusión del pescado de esa bajada de impuestos. «Ha agravado el descenso del consumo», advierten.

En concreto, según las cifras del sector, las ventas de pescado han caído un 20% en los dos primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Un descenso que vinculan a la exclusión de este producto del listado de alimentos afectados por la rebaja del IVA, que está «empujando la desincentivación que ya padece desde hace años su consumo en nuestro país».

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan que el consumo de productos pesqueros registró un descenso del 15,2% entre los meses de enero y noviembre de 2022 en relación con igual periodo del año anterior, que se suma a la caída acumulada del 20,4% entre 2008 y 2021.

El problema, por tanto, venía de antes. Pero el hecho de no haber incluido al pescado en los alimentos con IVA rebajado ha hundido todavía más el consumo, denuncian desde el sector fuentes que recuerdan que en prácticamente todos los países de la Unión Europea los productos pesqueros disfrutan de un tipo de IVA reducido con respecto al general y la mayoría de los gobiernos están aplicando tipos in-

feriores al 10% que actualmente se imputa en España.

Desde el sector denunciaron este jueves, en un almuerzo con periodistas organizado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) que agrupó a las principales asociaciones, que han intentado dialogar con el Go-

bierno y han obtenido el silencio por respuesta. A principios de año remitieron una carta conjunta a Pedro Sánchez en la que reclamaron que se reconsiderara «urgentemente» la decisión de no incluir al pescado en la cesta de la compra con IVA rebajado. Pero su petición fue ignorada. Ahora dan por hecho que el Ejecutivo va a seguir rechazando ampliar la rebaja del IVA a más alimentos básicos «por una cuestión contable». Y es que el Ministerio de Hacienda se ha negado por su impacto en la recaudación, así como a tocar el IVA de la carne.

Ante esta negativa, las principales asociaciones del sector pesquero están preparando una ronda de consultas con todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales y autonómicas para pedirles que incorporen a sus programas «la eliminación total del IVA en los productos pesqueros».

CIFRAS CLAVE

20,4%
DESPLOME ACUMULADO. El consumo de productos pesqueros del 20% entre 2008 y 2021.

10%
IVA DEL PESCADO. El Gobierno mantiene el IVA de muchos países del entorno europeo.

14,3%
IPC DE LOS ALIMENTOS. El sector calcula la inflación de la cesta de la compra si el pescado no tuviera IVA.



EFE

MÁS DE 2.000 APICULTORES SE MOVILIZAN EN MADRID

Más de 2.000 apicultores se movilizaron este jueves en Madrid para visibilizar los problemas por los que atraviesa la producción y comercialización de la miel y pedir la puesta en marcha de medidas ante la grave crisis coyuntural y estructural que atraviesa la apicultura y que afecta a más de 36.000 familias en España.



Vista general del encuentro Cita con EL MUNDO celebrado ayer con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en el Hotel Palace de Madrid. FOTOGRAFÍAS: JAVIER BARBANCHO



CITA CON EL MUNDO / PEPE ÁLVAREZ

El secretario general de UGT participa en un encuentro con EL MUNDO en plena negociación de la reforma de las pensiones y de la subida de salarios. El líder sindical niega que el Ejecutivo esté atacando a los empresarios; critica a Ferrovial por su salida, pero defiende a Mercadona de los insultos recibidos desde La Moncloa. Arremete contra el SEPE y pide que se penalice a los parados que rechacen un puesto.

«El Estado debería quitar el subsidio a quien rechace ofertas de empleo»

ALEJANDRA OLCESE MADRID
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió ayer al Gobierno que endurezca su posición con las ayudas públicas, de forma que cualquier parado o beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que rechace un puesto de trabajo, cuando venga unido de la formación necesaria para ocuparlo, se le penalice quitándole la prestación.

«Tendremos que dar un paso más y si una persona que rechaza una oferta, cuando le han ofrecido formación para que tenga las cualidades necesarias, si es una persona que está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o el Ingreso Mínimo

Vital, el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no», reivindicó durante su participación en el foro Cita con EL MUNDO.

A día de hoy, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera una infracción grave que un desempleado rechace un puesto de trabajo que se estima adecuado para él y le penaliza quitándole la prestación durante tres meses. Si rechaza una oferta por segunda vez, se la quitan seis meses, y si lo hace una tercera vez, la pierde para siempre. En cuanto al IMV, todos sus beneficiarios—salvo algunas excepciones—tienen un plazo de seis meses para apuntarse como demandantes de

empleo, pero no existe ninguna penalización si rechazan una oferta.

El líder sindical se mostró muy crítico con este organismo, del que dice que «se ha convertido en un mero registro», sin hacer políticas de empleo y sin contribuir a la recolocación de los tres millones de parados del país, lo que provoca que haya puestos vacantes y que el Ejecutivo opte por la contratación en origen en otros países en sectores como la construcción, a la que también se opone. «Hay tres problemas: uno, que las personas que deberían ocupar esos puestos estoy seguro que no reciben la oferta de trabajo; dos, que no tenemos orientación en los servicios de empleo jus-

tamente para ir formando a las personas en esas especialidades que van a ser necesarias; y tres, porque en lugar de ir a buscar personas a cualquier país, que en estos momentos están viviendo más o menos felices y que no tienen ninguna perspectiva de salir de su país, es más productivo coger a los parados, formarlos y que entren a trabajar», defendió.

Álvarez aprovechó que entre el público estaba Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, para tenderle una mano de cara a llegar a un pacto de salarios y aseguró que están abiertos a negociar cláusulas de revisión salarial en función de la productividad—las que ellos han propuesto es-

tán ligadas a la inflación y los beneficios empresariales—. «Pueden proponer, no estamos cerrados a que nos lo propongan. Como es un acuerdo y no un convenio, y luego se desarrolla en cada negociación, hay posibilidades de acuerdo», confió. La próxima semana se reunirán para ver la contrapropuesta de la patronal.

El líder de UGT reivindicó el impacto positivo que ha tenido la reforma laboral en el empleo, sobre todo por la estabilidad de los fijos discontinuos y pidió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se comprometa públicamente a respetarla si llega a la Moncloa. Pidió también un gran pacto nacional por la industria

y que el Gobierno aproveche su presidencia de turno del Consejo de la UE, a partir de julio, para intentar modificar la propuesta que ha salido del Parlamento Europeo sobre los vehículos de combustión. En su opinión, no tiene lógica que las empresas españolas tengan que invertir en torno a 10.000 millones para reducir un 25% las emisiones de esos coches de aquí a 2027 cuando nueve años después no podrán ser comercializados.

Preguntado por los ataques del Gobierno a los empresarios, negó que se estén produciendo: «No creo que esté habiendo un ataque del Gobierno a los empresarios. No es lo mismo hablar de los empresarios en general que citar a determinadas personas a las que se ha referido el presidente. Creo que deberíamos estar lamiéndonos algunas heridas, porque el Gobierno ha regado a las empresas del país de manera importante. Durante todo el proceso del covid, por cada euro dedicado a las políticas sociales hubo cinco euros dedicados a la protección del sistema productivo en nuestro país», resaltó.

Criticó a Ferrer, ya que consideró «demencial» que justifique su sa-



Francisco Rosell, adjunto al presidente de Unidad Editorial; Stefania Bedogni, directora general y consejera de Unidad Editorial; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Joaquín Manso, director de EL MUNDO; Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Nicola Speroni, director general y consejero de Unidad Editorial, ayer en el hotel Palace de Madrid.

Con 3 millones de parados, condena que el Gobierno contrate en origen

Defiende a Mercadona, que paga los mejores sueldos del sector

Pide a Feijóo que respete la reforma laboral si llega a La Moncloa

lida alegando falta de seguridad jurídica en el país, pero defendió a Mercadona de los insultos recibidos por la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, quien llamó a Juan Roig «capitalista despiadado».

«No me parece correcto poner el foco sobre empresas de nuestro país que pagan los mejores salarios en el sector de la distribución y el comercio, y que tienen una obra social de cierta envergadura en la Comunidad Valenciana», señaló.

Entre los asistentes al foro se encontraba Joaquín Manso, el director de EL MUNDO, quien lideró la entrevista a Álvarez; Stefania Bedogni y Nicola Speroni, directores generales y consejeros de Unidad Editorial; Javier García Pagán, director general del área News del grupo; Sergio Cobos, director general de Publicidad, y Francisco Rosell, adjunto al presidente. Todos agradecieron su presencia a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Miguel Garrido, vicepresidente de la patronal y presidente de CE-IM; Unai Sordo, secretario general de CCOO y, en especial, al embajador de Ucrania, Serhii Pohoreltsev.



El líder de UGT, Pepe Álvarez, contesta a las preguntas de Joaquín Manso y a otras formuladas por los asistentes al evento.



Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia, y Carlos Segovia, subdirector y corresponsal económico de EL MUNDO.



Stefania Bedogni y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, conversan antes de que diera comienzo el foro.



Sergio Cobos, director general de Publicidad de Unidad Editorial, el embajador de Ucrania, Serhii Pohoreltsev, y Miguel Garrido, de CEIM.



Marcos Iriarte, redactor jefe de Economía de EL MUNDO, Salvador Arancibia y Manolo del Pozo (Expansión).



La empresaria Paloma Segrelles asistió junto a su hija.



Ana I. Pereda, directora de 'Expansión', Javier G. Pagán, director del área News de UE, y Fernando Luján, de UGT.

NUEVOS TERRATENIENTES

Fondos de inversión patrimonialistas, de capital riesgo y de pensiones acaparan la compra de extensiones de terreno cultivable en España desde la pandemia



S abido es que Bill Gates se ha convertido en el mayor terrateniente individual y el granjero más grande de los Estados Unidos, tras adquirir la propiedad de 110 mil hectáreas (casi mil kilómetros cuadrados) de terreno fértil y cultivable en 18 estados de la Unión, a través de su firma Cascade Investment. Medios conspirativos dijeron que, en realidad, el magnate americano actúa de esa manera con la finalidad de que la producción de alimentos esté cada vez en menos manos. De hecho, las inversiones en terreno rústico por parte de otros multimillonarios como él se han convertido en una constante desde antes de la pandemia. Gates salió al paso de los especuladores diciendo que «mi grupo de inversión eligió hacer esto, y no está relacionado con la crisis climática». Simplemente es «por su constante revalorización y escasa volatilidad». De momento permite que los agricultores profesionales, antiguos propietarios, sigan con sus prácticas de trabajo, actuando simplemente como arrendador. Pero hay otros magnates que le siguen los pasos. En 2018, cien propietarios norteamericanos eran poseedores de 16 millones de hectáreas cultivables, lo que representa una superficie algo mayor que la de Costa Rica. Pero en realidad sólo 5 de los 100 acumulan el 25 por ciento del total. De hecho, el mayor terrateniente del mundo, John Malone, con 890 mil hectáreas, aunque la australiana Gina Rinehart es propietaria de 9 millones, eso sí, no todas cultivables.

FONDOS, CAPITAL RIESGO Y BILL GATES

La acumulación de suelo rústico por parte de grandes fortunas podría estar relacionado con la actividad agrícola o con proyectos de la agenda 2030



José Antonio Vera

De ahí que el acaparamiento de terrenos rústicos se haya convertido en una tendencia mundial, en la que España no podía ser una excepción. El número de fondos que invierten en el campo español se ha multiplicado por quince en las dos últimas décadas. Muchos de estos fondos son internacionales y perfectamente podrían estar relacionados con algunos de los cien principales terratenientes a nivel mundial. El entramado societario es tan complejo que difícilmente se pueden extraer conclusiones. Los fondos de inversión están haciendo operaciones en toda la península ibérica, pero principalmente en Portugal, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña. Generalmente buscan propiedades grandes, de más de 200 hectáreas, en zonas de regadío que sean aptas para cultivos de alto valor. Volviendo a Bill Gates, una de las teorías que también ha circulado es que la compra masiva de terrenos estaría vinculada con la creación de las nuevas ciudades 2030 en parajes actualmente deshabitados. La del magnate americano se llamaría Belmont, y sería la segunda smart city total después de las saudíes Neom y The Line, basadas en geoingeniería y gobernadas por la Inteligencia Artificial, además de estar cien por cien alimentadas con energías verdes, e incluirían taxis voladores, carne artificial, lluvia por siembra de nubes, cyber animales y una población formada por más robots que humanos. Las ciudades saudíes están ya en construcción, la de Gates, hoy por hoy, pura especulación.



Se dispara la inversión en campo

► Desde la pandemia, fondos patrimonialistas y de pensiones aglutinan cada vez más terreno agrícola en España. Una actividad que se ha vuelto un valor seguro para los inversores

Eva M. Rull. MADRID

Durante muchos años se ha considerado a Bill Gates el gran agricultor de los EE UU. Y es cierto que su patrimonio no es baladí. Desde 2013 hasta ahora el magnate de la informática ha acumulado más de 270.000 acres de tierras agrícolas repartidos por 18 estados. Sin embargo, otro inversor americano le supera como terrateniente. John Malone, antiguo consejero

delegado de Telecommunications Inc, cuenta con un patrimonio de 2,2 millones de acres de cultivo.

La concentración de suelo no solo sucede, como es tradicional, en EE UU o Australia, también está pasando en Europa y más concretamente en España. Los inversores profesionales y las grandes fortunas se acercan al campo motivados por la creciente inflación y por la inestabilidad financiera. Ven en el suelo una rentabilidad fija y cierta seguridad en el medio plazo. De hecho, ya antes de la pandemia, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y

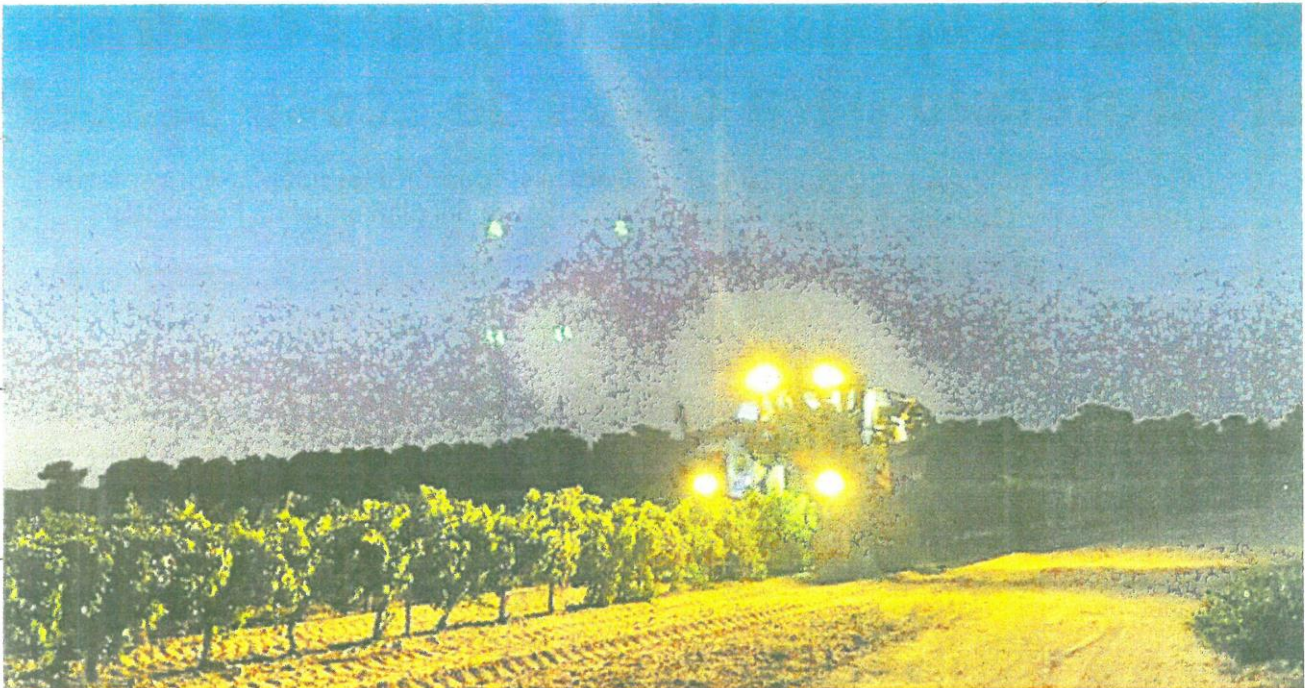
Bill Gates es el mayor «agricultor» de EE UU gracias a sus posesiones de tierra en 18 estados

Ganaderos (COAG) publicaba un informe sobre lo que llaman «uberrización del campo», un fenómeno que amenaza la supervivencia, decían entonces, de hasta 345.000 agricultores. «El aterrizaje de los fondos de inversión en el sector amenaza al modelo social y profesional de agricultura y ganadería mayoritario en Europa. Si los oligopolios empresariales se imponen, España camina hacia una agricultura sin agricultores», decía Miguel Padilla, secretario general de COAG, quien, además, alertaba de que si bien en España hay un millón de

explotaciones agrarias y el 93,4% son titulares físico y solo el 6,6% empresas, ese 6,6% de las explotaciones obtienen hasta el 42% del valor de la producción. Entre los ejemplos que cita el informe está el del sector lácteo. «En 1988 había registradas 250.000 explotaciones, mientras que en enero de 2019 quedaban 14.776. Sin embargo, la producción de leche ha crecido. En el caso de las frutas y hortalizas, en 2007 había una superficie de 1.462.000 ha con 215.000 titulares, en 2016 había 1.594.000 ha y 172.000 titulares. Es decir, en 10 años mientras el sector

Las operaciones de compraventa en 2022 alcanzaron las 85.502 operaciones, un 4% más que el año anterior. Por CC AA, el primer puesto lo ocupa Andalucía con más de 20.000 propiedades, seguida de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Entre las transacciones que han trascendido la prensa este año figuran la creación de Atilán Crops para la producción de 2.000 hectáreas de pistachos y almendros en la Península. En junio Citri&Co y la firma internacional PSP Investments formaron una alianza estratégica para adquirir y gestionar tierras por cerca de 150 millones de euros... La familia Moya compró al Conde de la Maza el cortijo de Arenales, de 2.700 hectáreas de olivar y dehesa, y Sergio Ramos vendió su finca de 40 hectáreas por cinco millones de euros. Axa, Unilever y Tikehau Capital Management crearon un fondo de inversión de alcance global para promover la transición hacia la agricultura generativa. El fondo contará con 300 millones de euros. También la gestora Climate Asset Management confirmó el primer tramo de un paquete de financiación de 150 millones de dólares para el programa de restauración en África que pretende restaurar 1,9 millones de hectáreas de suelo en el continente. Por último, la gestora Nuveen adquirió más de 2.000 hectáreas de tierras de cultivo en California y PSP Investments compró 7,2 mil hectáreas de viñedos en Australia de la Casella Family Brands.

AGRICULTURA | CAMBIOS EN EL REGLAMENTO



Vendimia nocturna durante el año pasado en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). / DIARIO DE ÁVILA

LAS NUEVAS REGLAS PARA EL VIÑEDO BENEFICIAN A CYL

Las explotaciones vitícolas medianas, que son las mayoritarias en la Comunidad, tendrán prioridad a la hora de solicitar autorizaciones para las nuevas plantaciones de viñedo concedidas por el Ministerio

P.V. / VALLADOLID

La regulación para la plantación de nuevo viñedo ha cambiado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada el pasado 25 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las nuevas condiciones de unas reglas que marcan el potencial vitivinícola de cada comunidad y que en los últimos años han permitido un crecimiento lento y muy controlado del viñedo en Castilla y León.

El cambio más sustancial de dicho reglamento afecta al criterio de priorización por tamaño de las explotaciones, de manera que se concederá mayor puntuación a las explotaciones medianas frente a las pequeñas. Un condicionante que hasta ahora era al revés. Dichos

cambios en la forma de priorizar las solicitudes beneficiarán, en principio, a nuestra Comunidad.

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural confirmaron a este periódico esta ventaja. «Ahora pasan a obtener mayor puntuación las explotaciones vitícolas medianas –que son las que tienen entre siete y 21 hectáreas– y las mayoritarias en Castilla y León, frente a las explotaciones agrícolas pequeñas –entre 0,5 hectáreas y siete–, que era como se priorizaba con anterioridad a la publicación de esta norma. Si bien todo depende del número y características de las solicitudes presentadas en las otras comunidades autónomas». Según los datos facilitados por las mismas fuentes con referencia el año 2021, el tamaño medio de las explotaciones vitíco-

las de Castilal y León es de 1,04 hectáreas.

Los cambios pueden beneficiar a las nuevas plantaciones de viñedo que conceda el Ministerio, aunque hay que recordar que en los últimos años han sido muy pocas hectáreas las que han permitido que se planten, principalmente en las zonas protegidas con denominaciones de origen, donde los propios consejos reguladores han limitado su crecimiento.

El Ministerio de Agricultura ha comunicado que autorizará una superficie muy reducida de nuevas plantaciones en 2023. En total, 1.407 hectáreas en toda España que se corresponde con el 0,15 por ciento de la superficie plantada a 31 de julio del año pasado. Según la normativa comunitaria, las nuevas plantaciones deben ocupar más del 0% y un

MODIFICACIONES

EXENTAS. Se desarrolla con más detalle la forma de proceder para las autorizaciones exentas de la autorización para plantaciones de viñedo.

COMPARTIDA. Se da la posibilidad de transferir una autorización concedida a un Titularidad Compartida a alguno de sus integrantes como consecuencia de su disolución.

CONDICIONES. Las comunidades autónomas podrán considerar como plantación no autorizada las plantaciones de viñedo realizadas incumpliendo alguna de las condiciones esenciales de la autorización concedida.

ARRANQUE. Queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación realizada sin autorización hasta que sea arrancada.

HASTA 2045. Con este nuevo texto legislativo se busca finalizar el sistema de control del potencial productivo en España, extendiéndolo hasta el año 2045. Esta adaptación permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola del país, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones fundamentales para el crecimiento de este sector.

máximo del 1% en el país, de manera que para este año se ha acordado ese 0,15%.

Las personas interesadas en solicitar estas autorizaciones para la plantación de nuevos viñedos lo tuvieron que hacer antes del 28 de febrero, según lo indicado por el Ministerio. De momento, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero ha limitado las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a 235 hectáreas.

AUTORIZACIONES DE 2022. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó a las comunidades autónomas las superficies a conceder por cada solicitud de autorización para nuevas plantaciones de viñedo en 2022, que suman un total de 946 hectáreas, de las que el 74% correspondieron a viticultores titulares de pequeñas y medianas explotaciones.

Por comunidades, Castilla-La Mancha es la que cuenta con mayor superficie de nueva plantación, 508 hectáreas, seguida de Castilla y León, con 129 y Cataluña, con 112. Estas concesiones se realizan sobre un total de superficie solicitada de 3.822 hectáreas, que se reduce a 3.045 una vez tenidos en cuenta los criterios de admisibilidad, y tras aplicar el límite máximo de 5 hectáreas por solicitante. La demanda de autorizaciones para plantación de nuevos viñedos mantiene su tendencia a la baja. La superficie total solicitada este año ha descendido un 17 % con respecto a 2021, año en el que a su vez ya se produjo una reducción del 40 % sobre 2020.

CONSUMO | ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS HOGARES CON DIFICULTADES

CARLOS CUESTA (SPC)

La realidad que vive la economía nacional, con una inflación del 6,1% en febrero y una tasa subyacente del 7,7%, está haciendo que la situación de muchas familias españolas haya entrado en unas tasas de pobreza y vulnerabilidad no recordadas en décadas, a pesar de que, en cifras macroeconómicas, el país creció en 2022 un 5,5% y, para este curso, la previsión está en torno a un 1,4%.

Ir al supermercado se ha convertido en un lujo. Los precios de los alimentos de enero de 2022 nada tienen que ver con los actuales. Un año después, cuatro de cada 10 productos se han encarecido un 30%, según un informe publicado por Facua, que ha hecho un seguimiento sobre la evolución de 507 referencias de nueve supermercados e hipermercados.

Ante este escenario, el Gobierno trató en diciembre de reducir el IVA a los productos más básicos, entre los que no incluyó la carne y el pescado, pero, a pesar de que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dijera en el Congreso que ella sí que había notado esta rebaja, lo cierto es que han seguido al alza.

En esta línea, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, lleva meses pidiendo al Gobierno topar los precios de los alimentos e, incluso, ha tratado de negociar con las grandes cadenas de distribución una serie de productos básicos a tarifas asequibles para las familias con mayores dificultades, pero sin ningún éxito hasta el momento.

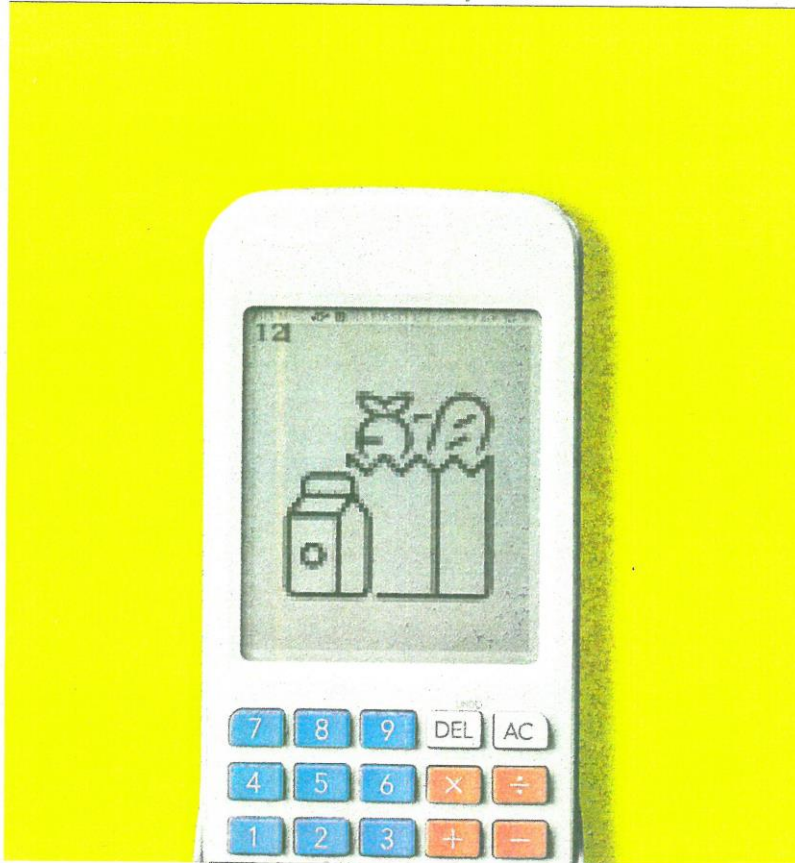
Las leyes del libre mercado imponen estas reformas y desde la patronal se ha cuestionado su legalidad. Según sostienen, se podían crear efectos indeseados de desabastecimiento puesto que ante bajadas de precio en el mercado nacional se irían a otros países donde obtuvieran mayores márgenes.

La nota de atención la daba esta semana Francia tras anunciar un acuerdo antiinflación con las principales cadenas distribuidoras para que ofrezcan, durante un trimestre -de marzo a junio-, una cesta de productos básicos al precio más reducido posible. Con un aumento interanual del coste de los alimentos en este país del 14,5%, el gabinete de Emmanuel Macron tomaba esta decisión para tratar de tranquilizar a su población en un momento político muy delicado de agitación social y protestas por la reforma de las pensiones. Incluso, su ministro de Hacienda, Brune Le Maire, prometió también un cheque de ayuda a los franceses de ingresos más bajos para alimentos.

Algunas de sus grandes cadenas, como Système U, ya tienen una lista de productos con unos precios limitados, en su caso afecta a 150. El grupo Intermarché ofrece 500 artículos a precios atractivos. Monoprix y Carrefour han tomado ya medidas equivalentes. Para que el consumidor identifique con rapidez que se trata de una oferta incluida en la campaña, cuentan con un lo-

CESTA DE LA COMPRA A LA FRANCESA

Los supermercados galos son un ejemplo de que se puede ayudar a las familias más vulnerables bajando el precio de los artículos básicos



El ministro de Hacienda Le Marie promete también un cheque para la clase más pobre

gotipo especial con la bandera francesa. En junio, habrá una revisión de la medida según evolucione la marcha de la inflación.

Ante esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en los supermercados galos que han bajado el precio a los alimentos básicos para que también se haga en España. La propuesta de Francia de crear una cesta de la compra con productos más econó-

micos tiene como objetivo principal garantizar el acceso a alimentos básicos a precios asequibles para las personas con bajos ingresos y mejorar la seguridad alimentaria.

Lo importante de este pacto es tratar de reducir la pobreza, el acceso a alimentos saludables y nutritivos como frutas, verduras, carne o pescado, estabilizar los precios y potenciar el mercado local.

En este sentido, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, declaró que se alegra de la iniciativa del Gobierno francés para que la distribución gala diseñe cestas de la compra antiinflación, al tiempo que subrayó que ella ya ha defendido que en España un paso de esta índole no solo «es posible» sino «completamente legal».

Díaz destacó que hay «asignaturas pendientes» de las que ya se ha-

bla «desde hace muchos meses». «No sólo es posible. Ya demostré que es completamente legal. Se puede ofertar una cesta, yo dije 20 productos, pero los que sean, por un precio limitado». Este paso es «completamente legal» e «imprescindible» para que «la gente pueda vivir un poco más feliz».

LLAMAMIENTO. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró la iniciativa del Gobierno francés para que la distribución gala diseñe cestas de la compra antiinflación.

Planas no dudó en hacer un llamamiento similar a la distribución española. «Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleven a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cade-

na Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los propios productores», advirtió.

Mientras, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos Ocaña, se desmarcó de estas medidas y manifestó que subvencionar hidrocarburos o alimentos «no ayuda a controlar la inflación» que, a su juicio, se mantendrá elevada y «llevará tiempo» situarla en niveles óptimos.

Ocaña explicó que estos pactos ayudan a la sociedad a mitigar el impacto de la subida de precios, pero estimulan el consumo y esto pone «más tensiones» al contexto inflacionista del país.

Para él, el aumento de los tipos se mantendrá durante cierto tiempo y será el BCE el encargado de intentar reducirlo que, según sus previsiones, continuarán aumentando en los próximos meses, incluso por

500

PRODUCTOS

alimentarios incluyen las cadenas de distribución francesa en su cesta de la compra antiinflación. Unos productos que llevan como distintivo la bandera gala que tiene por objeto el consumo de cerealia.

TRANSPARENCIA

La titular de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que espera que las multinacionales de la distribución francesa, que han anunciado las cestas de compra antiinflación y tienen presencia en España, lo extiendan también a los ciudadanos españoles. Calviño se congratuló de que en el país gallo se hagan públicas las cifras de los márgenes de los agricultores, los productores y distribuidores en un ejercicio en beneficio de la transparencia.

encima de las subidas que anticipan los mercados.

El experto de Funcas subrayó que «no es bueno para la economía» que los tipos de interés se sitúen en cero, como la situación vivida en los últimos 10 años. Esto provoca «distorsiones» que traen consecuencias como la existencia de empresas *zombis* que no acaban de quebrar porque tienen financiación barata, pero no generan crecimiento.

En definitiva, ante situaciones de gran vulnerabilidad económica en las que las familias no pueden hacer frente a subidas de precios tan desmesuradas por la inflación y con unos salarios moderados, se impone el sentido común para que los gobiernos, las empresas y los sectores productivos den la talla con ayudas de todo tipo que mejoren la vida de sus ciudadanos.

PETER SINGER “NO EXISTE UN DERECHO A MALTRATAR ANIMALES”

Pionero de la bioética, es uno de los pensadores más influyentes en los actuales debates políticos y legislativos

Por Ángel Díaz Fotografía de Richard Drew (AP)

Le conozca o no, esté de acuerdo con sus ideas o no, el australiano Peter Singer es uno de los pensadores que más ha influido en la sociedad actual y, previsiblemente, seguirá haciéndolo. Catedrático de Bioética en la Universidad de Princeton, dejó de comer carne hace 52 años y despierta tanta admiración entre los defensores del bienestar animal como animadversión en algunas de las versiones más radicales de este movimiento. Ayer recibió el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales junto al popular investigador Steven Pinker, quien ha confesado inspirarse en las ideas en Singer. En particular, en una de las más poderosas: la expansión del círculo de la ética. A partir de un impulso natural que nos une a nuestros allegados, la empatía hacia otros grupos va creciendo a medida que lo hace la sociedad: el clan, la nación, la humanidad, otras especies... Todos los seres que sienten y sufren, argumenta, deberían entrar en ese círculo, que cada vez depende menos de la biología y más del uso de la razón.

Nos encontramos, por tanto, ante una visión crítica, pero también optimista en cuanto al poder transformador del pensamiento, por encima de «los impulsos emocionales». En 1975, cuando publicó su primer libro en defensa del veganismo y el bienestar animal, Singer pedía paciencia a sus lectores para no juzgar antes de tiempo si sus argumentos eran «una salvaje exageración o una sobria estimación de una situación largamente ignorada».

P. Varias de las ideas en las que ha trabajado tienen un gran peso en los debates legales y políticos de hoy. Una de ellas es el especismo. ¿Qué es el especismo y por qué es importante?

R. La forma más fácil de entender qué es el especismo es pensar en ello como en el racismo, excepto que, en vez de ser una raza la que cree ser superior y tener derecho a dominar y esclavizar a otras, el especismo está, como su nombre sugiere, a nivel de las especies. Es una especie, *Homo sapiens*, la que piensa tener derecho a esclavizar a otras especies y explotarlas en beneficio propio. Y pienso que es reprochable en un modo análogo –no del todo idéntico, pero sí análogo– al modo en que el racismo es reprochable.

P. Tiene mucho que ver con otro de sus conceptos: la expansión del círculo de la ética. Hasta hace poco, estaban fuera hasta las mujeres, pero sigue expandiéndose. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde deberíamos?

R. En una mayoría –en la política, los gobiernos y la vida cotidiana– somos todavía especistas. Así que pienso que necesitamos expandirlo, y el límite

apropiado de esa expansión es si un ser es capaz de sentir dolor o placer. Yo uso el término ‘sintiente’ para referirme a ello, y diría que debemos expandirlo a todos los seres sintientes. A todos los seres que tienen conciencia y pueden disfrutar de sus vidas o ser miserables... Hasta ahí debemos empujar el círculo.

P. Una de las críticas que más recibe esta clase de argumentos, y que ya habrá escuchado, es que dar derechos a otras especies desvirtúa los derechos humanos.

R. Pienso que es posible que los humanos tengan derechos y los animales tengan también algunos derechos, y también que se reconozca que está mal hacer ciertas cosas a los animales. No pienso que prive a los humanos de ningún derecho de los que estén justificadamente en posesión. Si piensas que los humanos tienen derecho a hacer cualquier cosa a los animales, a torturarlos para divertirse o a confinarlos durante todas sus vidas porque nos gusta el sabor de su carne, entonces, por supuesto, yo niego esos derechos. No creo que los humanos tengan derecho a tratar a otros

seres sintientes como deseen, del mismo modo que los hombres no tienen derecho a tratar a las mujeres como deseen. Cuando las feministas defendían los derechos para las mujeres, alguien podría haber dicho: ‘Eso niega a los hombres el derecho a tener una mujer que les obedezca en todo’. Pero, por supuesto, no creemos que los hombres tengan ese derecho. De forma similar, creo que los derechos legítimos de los humanos no están amenazados por reconocer que hay cosas que no debemos hacer a los animales. Los únicos derechos amenazados son derechos que en realidad no tenemos.

Singer dejó de comer carne mientras vivía en Oxford, donde estudió filosofía y conoció a los pensadores utilitaristas que aún le inspiran.

Defiende, sin embargo, que la crítica al especismo «no está limitada a los utilitaristas», sino que puede alcanzarse la misma conclusión desde otros puntos de vista. En ese momento, a principios de los años 70, el vegetarianismo y el veganismo eran movimientos aún muy residuales. Podía comer menús vegetarianos en los restaurantes indios, recuerda, mientras que en Londres había su único establecimiento especializado en esta dieta. Su nombre era Crank, una palabra que, en su acepción popular, el diccionario Merriam-Webster define como «una persona moleestamente excéntrica», o también «demasiado entusiasta sobre un tema o actividad particulares». Y esa, precisamente, «era la actitud que la gente tenía hacia los vegetarianos», sonríe ahora.

P. ¿Tenemos derecho a comer carne?

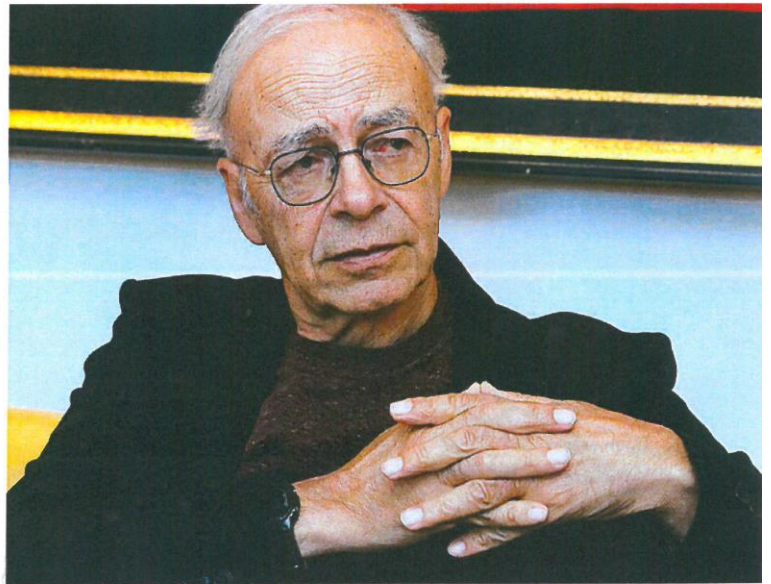
R. No, no diría que tenemos ese derecho. Creo que tenemos un derecho a hacer lo que es necesario para nuestra supervivencia, y que hay circunstancias en que podría ocurrir que, si no comes carne, te mueres de hambre. Quizá hay personas en algunas partes del mundo donde no hay otra forma de nutrirse. Pero, si hablamos de personas que pueden entrar en un supermercado y elegir una pieza de carne o productos vegetales igualmente nutritivos, que les

va a aportar lo que necesitan para estar sanos y bien alimentados, entonces no hay un derecho a coger el trozo de carne.

P. Pero, por supuesto, hay distintas formas de obtener carne y, como sabe, unas son mucho peores que otras: hay diferentes formas de tratar al ganado, de emitir gases... ¿Considera que deberían prohibirse algunas formas de producción o todas ellas?

R. No creo que haya ningún país donde la gente esté preparada para prohibir toda la producción de carne o productos animales, y no creo que puedas tener a los gobiernos haciendo cosas para las que la población no está preparada. Vimos las consecuencias en EEUU con la prohibición del alcohol en los años 20. Cuando prohíbes algo que la gente no cree realmente que sea malo, entonces obtienes un hampa criminal que lo provee. Pienso que los gobiernos deberían prohibir el confinamiento de animales en formas que realmente interfieran en sus vidas normales y les causen sufrimiento. Cuando cogemos pollos, o cerdos, u otros animales, y los confinamos en interior durante todas sus vidas, es una existencia miserable para ellos, y

INSPIRADOR DEL CAMBIO
«Peter Singer ha marcado un antes y un después en la consideración moral de los animales» y su impacto en las legislaciones de bienestar animal «está fuera de toda duda», subraya Luis M. Valdés Villanueva, catedrático de la Universidad de Oviedo y nominador del australiano.



pienso que debe estar prohibido. Pero, una vez que logremos eso, creo que todavía podría haber un rango de libertad para la producción de alimentos animales. Y creo que el público seguramente lo apoyará, al menos por el momento. Y a lo mejor, eventualmente, en un futuro más distante, estén preparados para eliminarlo progresivamente. Lo verán como algo no ético, y no como el tipo de cosa que quieran apoyar. Pero eso creo que será más adelante, en un futuro más lejano. No estoy sugiriendo que ahora deba prohibirse la producción de carne. No estamos preparados.

“La gente quizá empiece a ver comer carne como algo que no es ético, pero será en un futuro más distante”

“Debería prohibirse confinar animales en formas que interfieran en sus vidas normales y que les hagan sufrir”

► Fernández Carriedo asegura que no se plantean modificarla pese a las estimaciones al alza del Banco de España y valora que la Región siga creciendo aunque sea a menor ritmo

La previsión de crecimiento del 1,6% para este año «no se toca»

RUBÉN CACHO/ICAL



El portavoz del Ejecutivo autonómico, antes de comparecer ante la prensa tras el Consejo de Gobierno de ayer

R. Ortega. VALLADOLID

Esta semana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dejaba entrever que se van a revisar al alza las previsiones de crecimiento del PIB en España de este año, cifradas en su momento en el 1,3 por ciento, debido al buen comportamiento y resiliencia que está teniendo nuestro país, pero también Europa, a las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, un conflicto que ya ha superado el año de duración, y a la inflación.

Una noticia que, de momento, no va a afectar a Castilla y León ante una posible revisión del crecimiento previsto para este año por el Gobierno regional.

Al menos así se desprende de las palabras del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ayer tras el Consejo de Gobierno, donde aseguraba que Castilla y León «mantendrá» para este 2023 una previsión de crecimiento del 1,6 por ciento. «No nos

planteamos modificar este dato a pesar de estas mejores previsiones del Banco de España», decía el también portavoz de la Junta, mientras recordaba que hay otros informes que se han conocido recientemente, como el de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) que ha apuntado a que el crecimiento de la Comunidad este año será de tan solo el 1 por ciento, seis décimas menos de lo previsto en un principio por el Gobierno de Fernández Mañueco.

El consejero de Economía y Hacienda destacaba que la situación económica está estable en la Región, y hacía referencia a la Contabilidad Regional del último trimestre del pasado año que se presentaba hace apenas unos días, y en la que se desvelaba que Castilla y León creció el pasado año un 3,4 por ciento, empujado sobre todo por el sector Servicios y la Construcción, y se ponía de manifiesto que la Región ha recuperado ya lo perdido durante estos tres años de pandemia.

Fernández Carriedo, además, apuntaba que la Autoridad Independiente de Responsabilidad

La Junta da la cara por los sanitarios

► El Colegio de Médicos de Burgos ha generado un profundo malestar entre los sanitarios por un comunicado en el que, entre otras cosas, han culpado a los galenos del «exceso de muerte en soledad» durante la covid y recordado que «también existen los fines de semana y festivos. Un texto que ha indignado a los facultativos, que exigen dimisiones, aunque el Colegio ha pedido después perdón. La Junta ha dado la cara por los médicos, mostrando orgullo por su calidad y humanidad, y destacando que su compromiso «va más allá de lo profesional» así como su «eterno agradecimiento» a su labor durante la pandemia.

Fiscal (Airef) valoró la previsión de Castilla y León como realista y prudente, y, además, afirmaba que la Junta ve esta previsión más prudente que la estimación nacional. «A día de hoy no tienen previsión de modificar los cálculos previos realizados», insistió el consejero, quien aseguraba que Castilla y León seguirá creciendo este año, si bien a menor ritmo, algo que, en cualquier caso, siempre es positivo.

Descuentos Avant

Por otro lado, la Junta ya aplica la bonificación del 25 por ciento a los viajeros recurrentes que utilizan los trayectos que unen Zamora y Sanabria; Zamora y A Gudiña; Sanabria y A Gudiña y Sanabria con Ourense. Trayectos que se suman a otros veinte que se benefician de esta medida de la Junta para los próximos cuatro años. El consejero destacaba la buena valoración que tienen estas líneas entre los viajeros y su importancia y repercusión no solo ante la crisis actual, sino porque se apoya a las familias y, además, se planta cara a la desdoblación.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESS&AD

Empresa Familiar alerta del riesgo de pérdida de empresas por la burocracia

Presenta al Gobierno regional medio centenar de propuestas y plantea sustituir la burocracia por una declaración responsable / Alerta de la lentitud en las tramitaciones

JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) reclama a la Junta simplificar la burocracia que frena la actividad empresarial en la Comunidad. Los responsables de las empresas presentan al Gobierno regional medio centenar de propuestas para modificar trámites administrativos tras elaborar un «minucioso» estudio de la normativa autonómica con procedimientos y trámites administrativos que deberían modificarse para incrementar la simplificación y racionalización administrativa en la región y, con ello, favorecer la actividad empresarial.

El objetivo de este amplio informe trasladado a la Junta -se le presentó al vicepresidente, Juan García-Gallardo-, y a los portavoces parlamentarios en las Cortes regionales es que la administración reduzca los obstáculos normativos y burocráticos a los que tienen que hacer frente las empresas con el fin de llevar a cabo una gestión que sea más «ágil y eficiente» partiendo del principio de «mínima intervención administrativa», según indicó Pedro Palomo, presidente de la asociación.

Palomo, que advirtió del riesgo de que desistan de venir empresas de otras regiones y alertó de los problemas de empresas de aquí para seguir creciendo debido al retraso que conllevan algunos trámites, dijo que la normativa regional relativa a la administración electrónica se encuen-

tra obsoleta y añadió que por encima de Castilla y León hay diez Comunidades Autónomas con un mayor nivel de tramitación digital. En este sentido, insistió en la importancia de realizar expedientes de forma más rápida. El máximo responsable de EFCL señaló que las cargas burocráticas son un «lastre», se quejó de la «lentitud administrativa» que existe «desde hace décadas» en Castilla y León y pidió «soluciones» para mejorar las gestiones que realizan las empresas. En este sentido, el presidente de EFCL apeló a contar con «permisos, autorizaciones y licencias» respetando los «límites legales nacionales y europeos».

Palomo, acompañado por el director de Empresa Familiar, Eduardo Estévez durante la presentación de estas propuestas, indicó que las trabas burocráticas retrasan e incluso frenan proyectos de empresas de Castilla y León y al mismo tiempo traen aparejado que empresarios de la región lleven sus proyectos a otras comunidades autónomas y que empresas de otros territorios autónomos no se animen a invertir aquí.

El presidente de EFCL habló de la importancia y la necesidad de crear «empleo y riqueza» en Castilla y León y de «acortar plazos» en la respuesta de la administración. «Hay expedientes para ampliación de obras que tardan entre 12 y 20 meses», Palomo insta a la Junta y a las Cortes regionales al desarrollo de una nor-



Pedro Palomo. ICAL

mativa medioambiental básica autonómica, en cuyo diseño participen el Gobierno, los partidos políticos, las empresas e incluso los ciudadanos. «Las empresas son un factor crucial en la preservación del medio ambiente y su participación puede resolver gran parte del problema».

Otra carencia detectada en el informe es la «falta de información» de las administraciones públicas a los interesados sobre el estado del procedimiento. El estudio propone la creación de herramientas como una dirección de correo electrónico con respuesta inmediata o un portal web con información en línea sobre el «estado del procedimiento».

Los empresarios familiares también consideran vital para agilizar los procedimientos administrativos que los trámites intermedios en los que la administración solicite informes a terceros gocen de un plazo máximo para su emisión, con la introducción de un sentido del silencio administrativo positivo. «Echamos en falta una regulación específica en relación con el silencio administrativo, como sí han incluido otras normativas autonómicas que han promulgado los gobiernos de otras Comunidades», señaló Palomo en el transcurso de la presentación de este medio centenar de propuestas.

EFCL reclama también que la normativa autonómica se actualice para que todos los informes sectoriales que hayan de ser emitidos por los órganos o entidades del sector público regional se remitan electrónicamente a través de una plataforma específica que precise su plazo y que tenga interoperabilidad con otras plataformas públicas.

Los empresarios familiares proponen asimismo más protagonismo a las entidades colaboradoras de la Administración y a los Colegios Profesionales para sustituir funciones realizadas por la administración pública como la emisión de certificaciones y validación de proyectos técnicos «Es una medida ya adoptada por otras Comunidades Autónomas de forma exitosa y que ayudaría a acelerar las tramitaciones».

Sindicatos y patronal piden a la OIT que intervenga en el caso del Serla

VALLADOLID

CCOO, UGT y CEOE Castilla y León plantearán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realice una solicitud de «intervención urgente» ante el Gobierno de España por la «preocupante situación del Serla» en la Comunidad. Así lo trasladaron ayer durante una reunión mantenida en Ginebra entre representantes de las tres organizaciones y la subdirectora general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la OIT, Manuela Tomei, para dar a conocer el «peligro» que supondría la eliminación del servicio, algo «sin precedentes en España».

Los agentes económicos y sociales transmitieron que este hecho «originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para el buen funcionamiento de las empresas, como consecuencias para los trabajadores, y para la tutela de los derechos en el marco de las relaciones laborales, sin perjuicio del vacío normativo en la Comunidad».

Igualmente, expusieron la «difícil situación» por la que atraviesa el Diálogo Social en Castilla y León y la «importancia de que siga avanzando a través de este modelo de trabajo», para conseguir que la autonomía «vuelva a ser un referente a nivel nacional e internacional con iniciativas que permitan revertir las negativas cifras económicas registradas en los últimos meses».

CCOO, UGT y CEOE mostraron su satisfacción con el respaldo trasladado por la OIT. «No solo por el apoyo manifestado en defensa de la concertación social, sino también hacia el modelo de Diálogo Social de Castilla y León, visto como una referencia en otras comunidades autónomas y países», y que ha permitido la firma de más de un centenar de acuerdos en materia de empleo, servicios sociales y desarrollo económico, informa Ical.

Manuela Tomei, que ha estado acompañada por el director de la OIT para España, Félix Peinado, comunicó a los agentes económicos y sociales que uno de los pilares de la OIT es la cooperación entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para «fomentar el progreso social y económico». Además, hizo hincapié en la «enorme preocupación que existe en la Organización por las consecuencias irreparables que tendría para la ciudadanía de Castilla y León la no continuación de la concertación social».

Dimite el director general de Industria (Vox) de la Junta de Castilla y León

La cartera de Venganzones suma la tercera salida en menos de 1 año

F.R.L. VALLADOLID Ni un año de gobierno de Castilla y León de PP y VOX y la Consejería de Industria, Empleo y Turismo de Mariano Venganzones suma una nueva dimisión, la tercera en menos de doce meses. En esta ocasión, quien se marcha es el director general de Industria, Fernando del Campo.

«Fernando del Campo ha presentado su dimisión voluntaria como director general de Industria por motivos personales», señala el comunicado que remitió la propia consejería, quien indica que el hasta ayer jueves director general de Industria «se ha reunido con el consejero para informarle de que se ve obligado a tomar la decisión de dejar su cargo por asuntos personales».

Del mismo modo, ha querido agradecerle la confianza depositada al ponerle al frente de la Dirección Ge-

neral de Industria durante estos meses y ha lamentado tener que abandonar el proyecto tan ambicioso que se había fijado para este año.

Desde la Consejería se va a proceder a ocupar la vacante «a la mayor brevedad posible», puntualiza la breve nota de prensa de apenas seis líneas, en la que el consejero «agradece la excelente labor desarrollada por Fernando del Campo y lamenta su marcha».

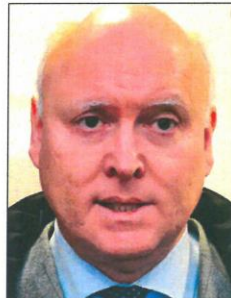
VILLANUEVA, EL PRIMERO

En poco menos de un año de constitución del Gobierno de la Junta, llega esta tercera salida, tras la marcha del número dos de la Consejería, del viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, en septiembre pasado, y la dimisión en junio de 2022 del gerente del EcyL, Javier Moreno Espeja, al descubrir-

se tras una interpelación de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid que era socio de la empresa que impartía los talleres de igualdad que su partido Vox, el mismo que le había nombrado, quería eliminar en Valladolid. Precisamente el ya dimitido Óscar Villanueva asumía también la gerencia del EcyL desde junio.

El primero de los salientes, Óscar Villanueva, experto analista de sistemas, fue nombrado con el encargo principal de estudiar la estructura de la Consejería y plantear una nueva organización que aúne criterios de gestión moderna orientada a la máxima eficiencia con el ahorro y la eliminación del gasto superfluo.

Una Consejería que cuenta con casi 2.000 personas en plantilla, incluido el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de la que dependen otras entidades como la Fundación



Fernando del Campo. ICAL

Serla o la Fundación para el Anclaje Empresarial y para la Formación en el Empleo de Castilla y León y que gestiona un presupuesto aproximado de 500 millones de euros, con un modelo que se consideró prioritario revisar para adaptarlo a las necesidades actuales. Venganzones también tuvo palabras elogiosas para este ingeniero burgalés. Destacó su ejemplaridad al proponer un modelo «en el que el primer puesto que se optimiza es el suyo», dijo.



La exclusión financiera del medio rural no se detiene

A la escasez de servicios se une la brecha digital y la falta de cobertura para acceder a internet en muchos puntos de la provincia



CARTA DEL DIRECTOR
SANTIAGO GONZÁLEZ
{Director de
El Día de Valladolid}

La exclusión financiera galopa y corta el viento en el mundo rural sin conocer aún dónde se encuentra la meta. Más de un 85 por ciento de los municipios vallisoletanos no cuenta ya con acceso a los servicios bancarios más básicos. Solo una treintena de poblaciones dispone de oficina bancaria y cajero automático, lo que ha provocado ya que la Diputación Provincial haya tenido que poner en marcha un servicio móvil y algunos fijos para que los vecinos de casi dos centenares de localidades puedan tener acceso a su dinero sin desplazarse a otros puntos de la geografía vallisoletana o de provincias colindantes. A esta escasez de servicios se une la brecha digital que existe en el medio rural por la dificultad de las personas mayores en acceder a la banca por internet e incluso por la falta de fibra óptica en algunas zonas.

El sistema bancario ha tendido a la concentración de entidades desde la crisis financiera de 2008, algo que aún se ha notado más en la denominada España vaciada, donde existía un interés social más allá del rendimiento económico de las sucursales existentes en municipios con menos de 5.000 habitantes. Está claro, y nadie lo discute, que las empresas privadas tienen como objeto principal ser rentables, o sea ganar dinero. Y eso es totalmente legítimo, en primer lugar porque si esa premisa no se cumple la supervivencia de esa sociedad mercantil es imposible. No obstante, las entidades financieras deben tener en cuenta otros factores correctores que, salvando su rentabilidad, les permita ofrecer un servicio a las personas que pueblan el medio rural y mantener el atractivo y los servicios necesarios para atraer a más habitantes a nuestros pueblos. La situación llega al extremo de que dos de los más ricos de Castilla y León (Simancas y Boecillo están en el top 5 de mayor renta disponible) tan solo disponen de una sucursal, y gracias.

El compromiso de las actuales entidades financieras es algo que se echa mucho de menos, quizás con la excepción de las dis-

tintas cajas rurales que, al contrario que el resto, están abriendo oficinas en los últimos años y mantienen una atención personalizada. Evidentemente ya no existe ese apego al territorio que sí tenían las antiguas cajas de ahorro, desaparecidas por la nefasta gestión político-económica, pero aún continúan existiendo miles de personas con sus ahorros, sus nóminas o pensiones de jubilación e incluso muchas empresas o administraciones con cuentas y movimientos importantes. Como en el resto de los servicios, la actual situación demográfica en la provincia hace inviable que todos los pueblos puedan disponer de oficina bancaria, sin embargo quizás debería realizarse una 'ordenación territorial' que fijase unas zonas de tamaño y población razonables que permitieran a los ciudadanos acceder a los servicios básicos en un radio de 10 o 20 kilómetros.

Como dije antes, la Diputación Provincial ha salido en auxilio de los vallisoletanos. Ya hace un año instaló cinco cajeros automáticos fijos en otras tantas localidades con más de 1.000 habitantes, mientras que esta misma semana ha iniciado un servicio móvil, que recorrerá la provincia a través de unas rutas periódicas para llevar a los vecinos los servicios financieros más básicos. Desde luego hay que destacar el esfuerzo del equipo liderado por Conrado Íscar para facilitar la vida de los vecinos de los casi dos centenares de pueblos que no disponen de un triste cajero para acceder al dinero propio. Habrá que ver el funcionamiento, pero los vallisoletanos lo han acogido con ilusión; como esa puerta que abre la esperanza de poder contar con dotaciones financieras, sanitarias, educativas o comerciales en los municipios rurales, aunque todas ellas sean itinerantes y solo acudan una vez a la semana o dos veces al mes.

Mientras tanto, las entidades privadas, que en los malos momentos disfrutaron de ayudas públicas, continúan con los recortes de oficinas y servicios en el medio rural. Y eso debería penalizarse.

Escrivá pacta con Bruselas y los socios de Gobierno la reforma de las pensiones

El ministro acuerda con la Comisión que los pensionistas puedan elegir entre un cómputo de 25 años o de 29, pudiendo excluir dos de peor cotización, a cambio de más ingresos

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO. Madrid El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha atado en Bruselas y con sus socios de Unidas Podemos un acuerdo político para una reforma clave de esta legislatura: la de las pensiones. Según fuentes de las negociaciones, Bruselas ha aceptado la última propuesta del Gobierno sobre el periodo de cómputo (los años de cotización para calcular la cuantía de la pensión), la piedra en el zapato que ha retrasado el acuerdo más allá del 31 de diciembre pasado, el plazo que se había marcado el Ejecutivo. El planteamiento de Escrivá es que el pensionista pueda elegir entre seguir con el sistema actual, de 25 años, u otro

de 29 años, de los que el jubilado podrá excluir los dos de peor cotización. Es decir, en la práctica, el pensionista elegirá entre un cómputo de 25 o de 27 años. La Seguridad Social aplicaría de forma automática el sistema que más beneficioso resulte, pero el jubilado podría elegir. Ese es el plan que el Gobierno expondrá hoy por la mañana a los agentes sociales. "Eso—en referencia a esta reunión con los agentes sociales—ha de entenderse como que estamos prácticamente llegando a un acuerdo", comentó ayer Escrivá. "Hemos tenido una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea", añadió.

El planteamiento de Escrivá se ha ido modulando con el paso de los meses. En noviembre puso encima de la mesa elevar el periodo de cómputo a 30 años, pudiendo descartar los dos de peor cotización. Los sindicatos rechazaron esta posibilidad, al igual que la parte de Unidas Podemos en el Gobierno, como indicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Es endurecer el acceso a la jubilación". La nueva propuesta del ministro, que en Bruselas reciben afirmativamente, es un menú con dos opciones: una que ampliaría el periodo de cómputo y otra que lo deja como está. La primera opción es la que convencería a la Comisión, que esperaba un au-

Trabajo ha participado en las conversaciones y acepta la solución

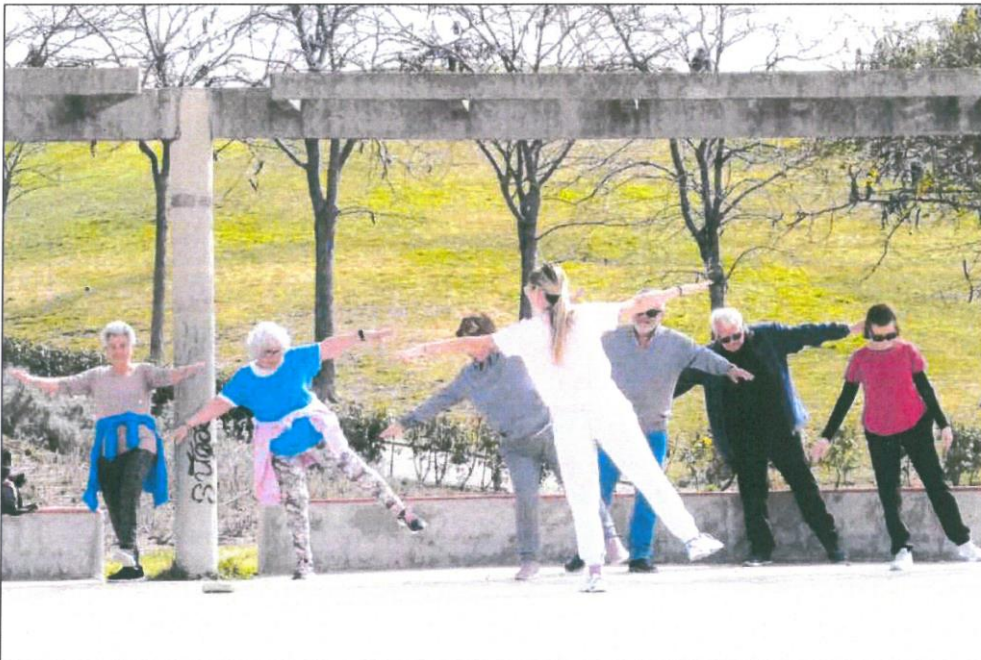
Las más afectadas son las mujeres, que tienen carreras más inestables

mento de este concepto, mientras que la segunda es la que certificaría el acuerdo con los sindicatos. Unidas Podemos y los socios parlamentarios de izquierdas del Ejecutivo. Fuentes de la negociación destacan que el equipo de la ministra de Trabajo ha participado en las conversaciones y que aceptan la solución pactada con Bruselas. "Ha sido un acuerdo largo, complejo y a varias bandas", destacan fuentes de la negociación. Este pacto es un revulsivo para la coalición, después de varias semanas muy complicadas políticamente por los desencuentros que ha generado la reforma de la ley del solo sí es sí.

El rechazo de los sindicatos y la parte minoritaria del Gobierno al aumento del periodo de cómputo se justifica en que los incrementos suelen causar una reducción de la pensión final. Esto es así porque, al incluir más años en el cálculo, teniendo en cuenta que en el inicio de la carrera laboral los salarios son menores, el resultado es una contracción de la cuantía. La posibilidad de que los pensionistas opten por el *statu quo*, por el cómputo de 25 años, disipa esta posibilidad para aquellos que hayan tenido carreras laborales irregulares, con periodos sin cotización. Las más afectadas por este escenario son las mujeres, que siguen asumiendo—normalmente por obligación—los cuidados, que conducen a pausas en la trayectoria laboral, excedencias y más jornadas parciales. Una de cada tres carreras laborales es irregular, según los cálculos del Gobierno. A la vez, si una persona ha tenido una carrera estable sin épocas de inactividad o de menor retribución, sí podría resultar interesante un periodo de cómputo mayor. Para ello se incorpora la nueva opción, de 29 años con la posibilidad de excluir los dos de peor cotización.

Mayor intensidad

Fuentes comunitarias confirman que en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones, informa Manuel V. Gómez. Matizan que el anuncio sobre los cambios en el sistema corresponde al Ejecutivo español. Voces de la negociación por la parte española coinciden en que los dos últimos meses han sido los de mayor intensidad en las conversaciones, que se han acabado resolviendo con el ministro Escrivá y el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión, Maarten Verwey, como principales interlocutores. Las mismas fuentes indican que la Comisión cree que hay "varios caminos" que conducen a la sostenibilidad del sistema, y que el planteado por el Gobierno es uno de ellos. Asimismo, el Gobierno se compromete con Bruselas a revisar cada tres años si el sistema sigue siendo sostenible, atendiendo a las proyecciones demográficas y las previsiones de ingresos. Del análisis de la Comisión no se escapa la conflictividad que ha estallado en Francia por la reforma que propone Emmanuel Macron, que contempla un aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. La contestación a las reformas que dan pasos atrás en los derechos conquistados es un aviso a navegantes.



Un grupo de personas mayores hacía ejercicio el pasado día 20 en el parque del Tío Pío en Vallecas (Madrid). / GEMA GARCÍA

Los sindicatos confían, la patronal lo ve "difícil"

El principal fin de la reforma de las pensiones es aumentar los ingresos afrontar el reto del envejecimiento, uno de los hitos comprometidos con la UE para acceder al cuarto desembolso de fondos Next Generation, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La herramienta fundamental es la subida de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023). Máxime cuando la "solución dual" pactada por el Gobierno y Bruselas supone un

aumento del gasto. Por ello, el Ejecutivo comunitario ha exigido medidas para compensarlo. Los planes del Gobierno español pasan por una combinación de instrumentos para aumentar los ingresos, con la intensificación del dote de esas bases máximas como principal herramienta. Así, los trabajadores con sueldos más altos aportarían más en cotizaciones. Esto se sumaría a las seis décimas extraordinarias en los tipos porcentuales de cotización que ya se están pagando.

El Ministerio de Seguridad Social no se reúne formalmente con los agentes sociales para hablar de pensiones desde diciembre, pero sí ha habido conversaciones periódicas. La reunión de hoy puede poner fin a la discusión.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO e interlocutor en la materia, comentó esta negociación ayer en la sede del sindicato, antes de que el ministro anunciase la reunión. "Estamos en el momento de retomar el rumbo para ver si es posible alcanzar un acuerdo", indicó. "Esta reforma debe asegurar más ingresos para el sistema y más protección para los pensionistas", añadió.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también comentó ayer: "Queremos que el Gobierno venga a la mesa con ese tema bastante avanzado, en qué parámetros se mueve la Unión Europea y la propia mayoría parlamentaria que tiene que tener para llevar la reforma legislativa adelante". Este periódico contactó con la CEOE, pero fuentes de la patronal indican que no pueden opinar sin conocer la propuesta concreta de Escrivá. Si confirman que acudirán a la cita. Sin embargo, fuentes de la negociación ven "difícil" que la patronal participe en el acuerdo, dado su rechazo al aumento en las bases de cotización. Tampoco cuenta con el apoyo del PP.